



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicación: 05001-31-05-003(24)-2018-00472-01  
Demandante: Antonio Jose Hernández Suárez  
Demandada: Colpensiones E.I.C.E., Cementos Argos S.A., C.I. Carminales S.A.  
Asunto: Apelación y consulta de sentencia  
Procedencia: Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín  
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique  
Temas: Pensión especial de vejez por alto riesgo, pago cotización adicional

**Medellín, noviembre quince (15) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora y el apoderado de Cementos Argos S.A., así como a impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2023 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Antonio Jose Hernández Suárez contra

Colpensiones E.I.C.E., Cementos Argos S.A. y C.I. Carminales S.A., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-003-2018-00472-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor Antonio Jose Hernández Suárez instauró demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones E.I.C.E., y Cementos Argos S.A., pretendiendo se condene a Cementos Argos S.A. a realizar los aportes especiales por alto riesgo a Colpensiones E.I.C.E., por todo el tiempo laborado como minero de socavón, asimismo, se condene a esta última a recibir y validar dichos aportes. Como consecuencia de lo anterior, se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de alto riesgo, condenándose a Colpensiones E.I.C.E. a reconocer y pagar la prestación, a partir del momento en que se cumplió con los requisitos mínimos legales y se condene al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, en síntesis, que el señor Antonio José Hernández Suárez, nació el 8 de junio de 1965, que laboró al servicio de Industrial Hullera S.A. ya liquidada, desde el 28 de octubre de 1985, que por dificultades económicas Industrial Hullera S.A. se vio abocada a solicitar a la Superintendencia de Sociedades la liquidación obligatoria, la cual fue decretada mediante Auto 410-7777 del 4 de noviembre de 1997 y que mediante audiencia de conciliación voluntaria del 26 de noviembre de 2007, llevada a cabo en el Ministerio de la Protección Social Regional Antioquia, la empresa Industrial Hullera S.A., acordó con el demandante, la terminación del vínculo laboral, estableciéndose como fecha de terminación del contrato de trabajo el 1º de junio de 1998, conciliación a la cual compareció Cementos Argos S.A. y se obligó a asumir los derechos laborales y pensionales del trabajador, además, se obligó a pagar el valor de las cotizaciones como de alto riesgo, adeudadas por la empresa Mineros Unidos S.A., hasta el 30 de octubre de 2007, sin embargo, de la historia laboral del actor, se observa que no todos los periodos están cotizados en alto riesgo.

Finalmente, se indicó que por cumplir los requisitos del Decreto 1281 de 1994, el demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo el 24 de octubre de 2017, petición que a la fecha no ha sido resuelta.

## 1.2.- CONTESTACIÓN

Al replicar la demanda **Cementos Argos S.A.**, expresó que se acepta lo relacionado con la conciliación celebrada el 26 de noviembre de 2007, en los términos consignados en el acta, precisando que en todo caso la sociedad efectuó el pago de los conceptos a los que se obligó en el acuerdo, especialmente los aportes en pensión, no existiendo razón para que Colpensiones E.I.C.E. no registre las semanas pagadas, pues insiste que Cementos Argos S.A., trasladó los valores correspondientes al Instituto de los Seguros Sociales; indicó no constarle los demás hechos, por cuanto no se tuvo intervención en los mismos, no se tiene información o no corresponden a hechos, sino a la sustentación jurídica de las pretensiones.

Se opuso a las pretensiones contra la sociedad y formuló las excepciones de prescripción; inexistencia de la obligación; pago; subrogación; falta de competencia.

Por su parte, el curador ad litem designado para representar la sociedad **C.I. Caminales S.A.**, admitió como ciertos los hechos de la demanda, advirtiendo que algunos no hacen referencia a situaciones fácticas, sino que corresponden bien sea a transcripciones del acta de conciliación o a sustentaciones jurídicas de las pretensiones.

De igual forma, manifestó oposición a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo como excepciones las de prescripción; cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación; buena fe y la genérica.

Finalmente, la apoderada de **Colpensiones E.I.C.E.**, aceptó como cierta la fecha de nacimiento del demandante y que presentó solicitud de reconocimiento de pensión especial de vejez, aclarando que en la misma fecha se dio respuesta, e indicó no constarle los demás hechos, por tratarse de circunstancias fácticas ajenas al conocimiento de la entidad, que no le corresponde afirmar o negar y deberán ser objeto de acreditación dentro de la litis.

En su defensa, formula excepciones bajo la denominación de inexistencia de la obligación de Colpensiones de reconocer pensión especial de vejez por actividad alto riesgo al demandante, inexistencia del reconocimiento de intereses moratorios; buena fe; prescripción; compensación e imposibilidad de condena en costas.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 6 de octubre de 2023, declaró que el señor Antonio Jose Hernández Suárez, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo a partir del 02 de marzo de 2020, con una mesada pensional equivalente al salario mínimo, en proporción de 13 mesadas anuales; condenó a Colpensiones a pagar al demandante por concepto de retroactivo pensional causado entre el 02 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023, la suma \$43.746.671, que deberá ser indexada al momento del pago, autorizando el descuento de los aportes al sistema de seguridad social en salud; condenó a Cementos Argos S.A., a pagar a Colpensiones la cotización adicional por actividades de alto riesgo, por los tiempos laborados por el demandante en Industrial Hullera entre el 28 de octubre de 1985 al 01 de junio de 1998, por los ciclos faltantes de enero a diciembre de 1995, de enero a octubre de 1996 y los meses de diciembre de 1996, enero, febrero y marzo de 1997 y junio de 1998, de acuerdo con el ingreso base de cotización reportado para cada periodo; ordenando a Colpensiones depurar la deuda por concepto de cotización adicional, con el pago realizado por Cementos Argos S.A. al Seguro Social en el proceso de cobro coactivo, con la información que repose en sus bases de datos

y al PAR ISS, efectuar una nueva liquidación y adelantar las acciones de cobro; absolvió a C.I. Carminales S.A., de la totalidad de las pretensiones y condenó en costas a Cementos Argos S.A. y Colpensiones.

### 1.5.- RECURSO DE APELACIÓN

La procuradora judicial del señor **Antonio Jose Hernández Suárez**, interpuso el recurso de alzada, expresando disenso frente a la fecha a partir de la cual se hace el reconocimiento de la pensión de vejez, 02 de marzo de 2020, solicitando, se tenga en cuenta que el demandante desde el año 2017 elevó la solicitud a Colpensiones para el reconocimiento de esta modalidad de pensión, sin embargo, mediante comunicados del 24 de marzo de 2017 y 17 de noviembre de 2017, la entidad simplemente señala que realizará acciones de cobro, el número de semanas que se deben cumplir y no resuelve de fondo la petición presentada, igualmente en comunicado del 24 de agosto de 2017 señala que hay mora en el pago de la cotización especial de alto riesgo por Industrial Hullera y Mineros Unidos y que iniciaría acción judicial, sin que durante el proceso, se emitiera decisión de fondo, ni se evidenciara acción concreta para el cobro, solo hasta el año 2022 se hace una acción donde no se identifica si se trata del requerimiento de la cotización especial, estas acciones de Colpensiones generan una inducción en error al demandante de que debe seguir cotizando porque aún no cumple requisitos para la pensión y durante el trámite de este proceso se hacen cotizaciones posteriores pequeñas, en 2019 cotiza en noviembre 8 días, en diciembre 25 día, en 2020 en enero, febrero y un día de marzo, esas son las cotizaciones que realiza durante todo este tiempo por las cuales se niega el retroactivo pensional a que tiene derecho desde el cumplimiento de los requisitos, aplicándole eventualmente el fenómeno prescriptivo.

Sostuvo que el juez señaló que esta pensión tiene la teología de dejar que el trabajador tenga un descanso anticipado de la labor de alto riesgo, sin embargo, desde el año 2007 que sale de Carminales el demandante no ha continuado expuesto a labores de alto riesgo y las cotizaciones mencionadas anteriormente,

no son labores de alto riesgo, por lo que la teología de esta pensión no se trasgrede con el reconocimiento del retroactivo pensional.

Igualmente solicita se reconozcan los intereses moratorios solicitados, para lo cual se insiste en el oportuno reclamo del actor en el año 2017, además de las solicitudes reiteradas a que hiciera los cobros del aporte especial, sin la ejecución oportuna de Colpensiones, se apoya en que en el caso del señor Oscar Rojas Gallego, radicado 050013105017201700198 el Tribunal Superior de Medellín, acoge estas posiciones donde reconoce la retroactividad de la pensión a pesar de haberse realizado cotizaciones posteriores, por cuanto oportunamente se realizó la reclamación de la pensión al igual que los intereses de mora.

Por su parte, el apoderado de **Cementos Argos S.A.**, interpone recurso en lo que respecta a la obligación impuesta a la sociedad, aduciendo que la juez indica que en el proceso está acreditado el pago por parte de Cementos Argos S.A. al área de cobro coactivo del ISS, pagos que están probados con las consignaciones realizadas por la sociedad y la certificación realizada por el revisor fiscal, indicando que no está acreditado los conceptos o razones por los cuales se hizo ese pago, por lo que impone la obligación de efectuar el pago y a Colpensiones de depurar la deuda e iniciar acciones de cobro.

Itera que está acreditado que Cementos Argos celebró un acuerdo conciliatorio con el demandante y en virtud de una liquidación de deuda que hizo el ISS en su área de cobro coactivo, Cementos Argos procedió a efectuar el pago de una millonaria suma de dinero que indexada a hoy asciende a \$3.694.688.317.84, pagos que se hicieron en marzo, mayo, septiembre y diciembre de 2008, mayo y junio 2009 y febrero de 2011, que se aportó dicho medio de prueba, el cual no fue debidamente valorado por la juez y hay un documento que contiene una relación de trabajadores de la empresa Industrial Hullera S.A., elaborado por el ISS, y en el que, a folio 44 del archivo 15, aparece el demandante con su número de cedula y hay unos ciclos que van desde 95/01 a 98/02, liquidados y cobrados por el ISS, pagos que desconoce Colpensiones, pero ese simple desconocimiento no da cuenta de la inexistencia de pago, lo único que hace es evidenciar el

desorden administrativo del ISS, de la transición que hubo entre el ISS y Colpensiones y el desorden que pervive en Colpensiones, quien además de decir en respuesta a un oficio que Cementos Argos no le pagó cotizaciones de alto riesgo y adicional aporta procesos de cobro coactivo que inició apenas en el año 2022 a una empresa ya liquidada y por una cifra incluso inferior a la cancelada por Cementos Argos, pretende se obligue nuevamente a la sociedad a pagar unos ciclos ya liquidados.

Agregó que la labor de depuración de la historia laboral y de imputación de los pagos realizados, está en cabeza de Colpensiones y la historia laboral del trabajador, deberá contener esos ciclos que fueron consignados y pagados por Cementos Argos, ese dinero no puede simplemente desaparecer y quedar en las arcas de una entidad del Estado, para que nuevamente Cementos Argos se vea obligada a pagar cotizaciones por un cálculo actuarial, por una suma nuevamente millonaria, no solo por el demandante, sino por los demás trabajadores de Industrial Hullera por los que Colpensiones está nuevamente cobrando, resaltando que para hacer ese cobro coactivo si tuvo Colpensiones la capacidad de depurar una deuda, pero no tuvo la capacidad de buscar los pagos que se han acreditado desde hace más de 10 años en estos procesos judiciales, por lo que la condena a Argos es generar un detrimento patrimonial a la sociedad, estándose de acuerdo con que el trabajador tiene derecho a su pensión, pero no puede ser a cargo del patrimonio de Cementos Argos nuevamente, existiendo medio de prueba suficiente para que se condene a Colpensiones a adecuar la historia laboral del trabajador y ver reflejados esos ciclos en alto riesgo que fueron pagados por Cementos Argos S.A., pues no se puede trasladar el descuido, el desorden, omisión y falta de custodia de la historia laboral del demandante por parte de Colpensiones y el ISS a la codemandada.

Refirió que además es muy diciente que no se haya obtenido respuesta del PAR ISS, para que informe donde esta ese dinero, que hizo con esa plata, porque no aparece reflejada en la historia laboral de los trabajadores y porqué se inició acciones de cobro, si se recibió el dinero y no se hicieron las acciones

necesarias, por lo que solicita un análisis completo de los medios de prueba y se revoque la sentencia en lo desfavorable a Cementos Argos S.A.

## 1.6.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión se pronunció la apoderada de la parte **actora**, quien reitera los puntos de inconformidad expuestos al sustentar el recurso de alzada con el fin de que se modifique la sentencia en relación a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión de vejez, siendo claro que el demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, contando con más de 500 semanas de servicio en alto riesgo al 28 de julio de 2003, siendo aplicable el Decreto 1281 de 1994, advirtiendo que a junio de 2015 el actor contaba con más de 50 años de edad y 1300 semanas, presentándose negligencia de Colpensiones en la resolución de las diferentes solicitudes de normalización de la historia laboral y del cobro de aportes de alto riesgo, por lo que hay lugar al reconocimiento del retroactivo pensional, sin tener en cuenta los aportes a pensión realizados entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, toda vez que los mismos son consecuencia de la omisión de Colpensiones. Finalmente, sostuvo que es viable aplicar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y reconocer los intereses moratorios.

En igual sentido, el apoderado de **Cementos Argos S.A.**, emitió pronunciamiento reiterando la solicitud de revocatoria de la condena impuesta, teniendo en cuenta que la sociedad realizó el pago completo y en debida forma de su obligación, partiendo de la liquidación realizada por el área de cobro coactivo del ISS, pago derivado de un acuerdo conciliatorio al cual se dio cumplimiento, obrando certificación del revisor fiscal de Cementos Argos, que acredita el pago al ISS por valor de \$1.724.825.568, valor que indexado a la fecha correspondería a \$3.711.278.228,82, suma que ingresó a la cuenta de depósitos judiciales del ISS y no pueden desaparecer.

## 2. CONSIDERACIONES



## 2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

De igual forma, procede la consulta en favor de **Colpensiones E.I.C.E.**, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

## 2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- (i) Que el señor Antonio Jose Hernández Suárez nació el 8 de junio de 1965, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 26 del anexo 02 del expediente digital.
- (ii) El señor Antonio Jose Hernández Suárez, laboró al servicio de Industrial Hullera S.A., en Liquidación obligatoria, desde el 28 de octubre de 1985 hasta el 1º de junio de 1998, tal y consta en el acta de conciliación del 26 de noviembre de 2007, visible a folios 62 a 68 del anexo 02 del expediente digital.
- (iii) Que el demandante solicitó a Colpensiones el 24 de octubre de 2017 el reconocimiento de la pensión especial de vejez, y así mismo, solicitó a la administradora de pensiones iniciar las acciones de cobro de la cotización especial por alto riesgo, según se desprende de la reclamación glosada a folios 102 del anexo 02 del expediente digital.

(iv) Que el pretensor cotizó un total de 1319.57 semanas en toda su vida laboral, conforme la historia laboral aportada por Colpensiones, actualizada al 18 de noviembre de 2021, la cual milita a folios 52 a 61 del anexo 39 del expediente digital, número de semanas que resulta coincidente con las reportadas en la historia actualizada al 27 de mayo de 2022, anexo 46 del expediente digital.

(v) Que el actor, presentó nueva solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez el 29 de junio de 2023, prestación que le fue negada por Colpensiones mediante resolución SUB 179486 del 12 de julio de 2023, véase folios 16 a 26 del anexo 51 del expediente digital.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

- ¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y consulta proferida el 06 de octubre de 2023 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si el señor Antonio Jose Hernández Suárez, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, y en caso afirmativo, deberá establecerse, la fecha a partir de la cual tiene derecho al disfrute de la prestación y si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

¿Si es procedente revocar la condena impuesta a la sociedad Cementos Argos S.A., para lo cual habrá de determinarse si Cementos Argos S.A., canceló en favor del accionante, el valor de los aportes o puntos adicionales de cotización, en virtud del acuerdo conciliatorio llevado a cabo el 26 de noviembre del año 2007?

### **2.4.- TESIS DE LA SALA**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual (i) el señor Antonio José Hernández Suárez, tiene derecho al reconocimiento y pago

de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, (ii) correspondiendo como fecha de disfrute de la prestación el 2 de marzo de 2020, (iii) no siendo procedente el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para la fecha en la cual se presentó la reclamación administrativa, el actor no acreditaba los requisitos para acceder a la prestación, (iv) debiéndose revocar la condena impuesta a cargo de Cementos Argos S.A., en tanto se acredita el pago de los aportes en favor del trabajador correspondientes a Industrial Hullera Liquidada, consecuentemente, la decisión de primer grado será **revocada, modificada y confirmada**, como se pasa a exponer:

## 2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

La pensión de vejez especial para trabajadores que se desempeñen en actividades calificadas como de alto riesgo, fue prevista por el legislador teniendo en cuenta que estos oficios por su peligrosidad, en una prolongada ejecución, producen un desgaste orgánico prematuro y disminuyen la expectativa de vida, lo cual justifica que estas personas puedan acceder a la pensión de vejez en una edad más temprana.

Señala el demandante que ha laborado en actividades de alto riesgo, específicamente como minero de socavón, actividad que se encuentra catalogada como de alto riesgo, conforme lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 2° del Decreto 2090 del año 2003.

Respecto a esta actividad, los artículos 3° 4° y 6° del citado Decreto 2090 de 2003, establecen las condiciones y requisitos para acceder a la prestación:

*“Artículo 3°. Pensiones Especiales de Vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.”*

*“Artículo 4°. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:*

- 1. Haber cumplido 55 años de edad.*
- 2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.*

*La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.”*

*“Artículo 6°. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.*

*Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.”*

## 2.6. CASO CONCRETO

En el asunto sometido a consideración de la Sala, está acreditado que el señor José Hernández Suárez, laboró al servicio de Industrial Hullera S.A., en Liquidación obligatoria, desde el 28 de octubre de 1985 hasta el 1° de junio de 1998, tal y consta en el acta de conciliación del 26 de noviembre de 2007, visible a folios 62 a 68 del anexo 02 del expediente digital. Asimismo, se extrae de la historia laboral del accionante, que este prestó sus servicios a la sociedad Mineros Unidos S.A., desde el 1° de febrero de 1999 al 31 de octubre de 2007, periodos en los cuales realizó actividades catalogadas como de alto riesgo en socavones, periodos que corresponden a 21 años, 4 meses, de ahí, que, en principio, el señor Hernández Suárez, contaría con **1098.24 semanas de cotización en el desempeño de actividades de alto riesgo.**

Destaca la Sala, que, conforme lo consignado en el acta de conciliación celebrada por el demandante y Cementos Argos S.A. el 26 de noviembre de 2007, es claro que el empleador Industrial Hullera, adeudaba las cotizaciones en seguridad social en pensiones y en alto riesgo en favor del pretensor, obligándose Cementos Argos S.A., a cancelar dichos aportes al ISS, previa cuenta de cobro, pagos que comprenden todo el periodo laborado, esto es, desde el 28 de octubre de 1985 hasta el 1° de junio de 1998. En igual sentido, se obligó Cementos Argos S.A., a realizar el pago de los aportes en pensiones y cotización de alto riesgo, dejadas de cancelar por Mineros Unidos S.A., hasta el 30 de octubre de 2007, fecha de finalización del vínculo laboral del pretensor con el citado empleador., por lo que es claro, que deben tenerse por acreditado que **el pretensor laboró 7785 días en actividades de alto riesgo**, equivalentes a 1098.24 semanas de cotización.

Para reforzar la acreditación de la actividad de alto riesgo desplegada por el accionante, se resalta que en la audiencia de trámite y juzgamiento se recibieron las declaraciones de los señores León Alfredo Molina Ossa y Joel Esteban Restrepo, el primero indicó que conoce al demandante desde que empezó a trabajar en la empresa Industrial Hullera en 1985, porque había ingresado a trabajar allí desde 1980, afirmando que el actor trabajaba como encapizador palero, tumbaba el carbón y lo echaba a una transportadora con pala y que trabajó en esa labor hasta el 2007, que dicha labor siempre era en socavón, aclarando que Industrial Hullera cerró en 1998 y de ahí los pasaron a Mineros Unidos, la misma empresa con diferente razón social.

Por su parte, el señor Joel Esteban Restrepo, aseveró que ingresó a laborar a Industrial Hullera en 1986 y cuando entró el demandante ya laboraba allí, que las labores del señor Antonio José siempre han sido en socavon como encapizador palero, sosteniendo que el demandante laboró para Industrial Hullera hasta finales de abril de 1998, porque el fue de los trabajadores que concilió, que durante todo ese tiempo realizó las mismas labores y que luego estuvieron trabajando en Mineros Unidos desde febrero de 1999 hasta el 30 de octubre de 2007, realizando iguales funciones.

Lo dicho por los testigos está en armonía con lo expresado por el accionante al rendir interrogatorio de parte, quien en igual forma manifestó que trabajó en Idustrial Hullera, dentro de socavon como encapizador palero, que en todo el tiempo realizó el mismo oficio y que celebró un acuerdo conciliatorio en el 2007 asesorado por el sindicado.

Se sigue de lo anterior, que se encuentra probada la actividad de alto riesgo desempeñada por el accionante, puntualizando, que en el expediente administrativo allegado por Colpensiones, en el archivo *GEN-REQ-IN-2016\_12853043-20170130110712.pdf*, Colpensiones señala que el accionante cuenta con **13 ciclos** con cotización de alto riesgo con el empleador Industrial Hullera y **105 ciclos** con el empleador Mineros Unidos, tiempo equivalente a **506.22 semanas** con cotización especial, es decir, con los puntos adicionales exigidos para las actividades de alto riesgo, así:

CC 98477401 ANTONIO JOSE HERNANDEZ SUAREZ.

NIT	APORTANTE	CICLO	OBSERVACIÓN
811015154	MINEROS UNIDOS	199902 199903 199904 199905 199906 199907 199908 199909 199910 199911 199912 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108 200109 200110 200111 200112 200201 200202 200203 200204 200205 200206 200207 200208 200209 200210 200211 200212 200301 200302 200303 200304 200305 200306 200307 200308 200309 200310 200311 200312 200401 200402 200403 200404 200405 200406 200407 200408 200409 200410 200411 200412 200501 200502 200503 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 200605 200606 200607 200608 200609 200610 200611 200612 200701 200702 200703 200704 200705 200706 200707 200708 200709 200710	Cotización Alto Riesgo ( 105 Ciclos )
890903539	INDUSTRIAL HULLERA SA	199504 199511 199605 199608 199611 199704 199705 199706 199710 199712 199803 199804 199805	Cotización Alto Riesgo ( 13 Ciclos )

Adicionalmente debe tenerse en cuenta las semanas cotizadas entre el 28 de octubre de 1985 hasta 1994, (22 junio de 1994, fecha de publicación del Decreto

1281) cuando no se exigía la cotización especial, que corresponden a 3154 días o **450.57 semanas**, obteniendo un gran total de **956.79** semanas laboradas en alto riesgo, sin que se puedan desconocer los ciclos faltantes por cotización adicional en vigencia de la relación laboral con Industrial Hullera, que corresponden a los meses de julio a diciembre de 1994, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 1995, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de 1996, enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y noviembre de 1997 enero, febrero y junio de 1998, pues es indiscutible que la mora o falta de pago de la cotización adicional por parte del empleador, no puede afectar los derechos del trabajador, a quien le compete exclusivamente acreditar la prestación personal del servicio en actividad de alto riesgo, tal y como quedó acreditado en el plenario, correspondiéndole a la administradora de pensiones adelantar las labores de cobro pertinentes.

Bajo el anterior panorama, se tiene que el señor Antonio José Hernández Suárez, acredita un total de **1319.57** semanas cotizadas, de las cuales a **1098.24** semanas corresponden a actividades de alto riesgo.

Ahora, en relación a la normativa que debe aplicársele al actor, se tiene que el artículo 6° del citado Decreto 2090 de 2003, estableció un régimen de transición, del cual se benefician quienes al momento de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, esto es, 28 de julio de 2003, acreditaran 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo, densidad que es cumplida por el demandante, quien para la data señalada contaba con 877,24 semanas laboradas en alto riesgo, por lo que la norma a aplicar, tal y como lo definió la a quo, es el Decreto 1281 de 1994.

Relieva la Sala, que si bien el párrafo del citado artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, establece como requisito adicional para aplicar la transición, el cumplir con los requisitos señalados por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado reiterativamente, que el único requisito exigible para la aplicación de la transición pensional entre el

Decreto 2090 de 2003 y el Decreto 1281 de 1994, es haber cotizado las 500 semanas.

Sobre el particular, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en sentencia SL4330 de 2021, sostuvo:

*“Posteriormente, el Decreto 2090 de 2003 modificó los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez y en el inciso 1.º del artículo 6.º se estableció un régimen de transición respecto al Decreto 1281 de 1994 para los afiliados que al momento de la entrada en vigencia de dicha norma -28 de julio de 2003- acumulen 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo.*

*Sobre el particular, se destaca que la jurisprudencia de la Sala precisó que este es el único requisito que se exige a los afiliados para preservar el citado régimen transicional, en tanto la exigencia que establece el parágrafo del precepto de cumplir también los requisitos para la transición de la prestación ordinaria es desproporcionada y contraria a la finalidad de la prestación, de modo que en virtud del principio de favorabilidad - artículo 53 de la Constitución Política- esa es la interpretación más adecuada con el propósito teleológico de la normativa (CSJ SL1353-2019)”.*

Postura que como acertadamente lo refirió la falladora de primera instancia fui iterada en la sentencia SL 622 de 2023.

En este desarrollo argumentativo, se concluye que el señor Antonio José Hernández Suarez, es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 6º del multicitado Decreto 2090 de 2003 y en tal sentido, su derecho pensional como se consignó en líneas anteriores se rige por es el Decreto 1281 de 1994, disposición que en el artículo segundo establece que los afiliados al Sistema General de Pensiones que se dediquen de forma permanente y por lo menos durante 500 semanas continuas o discontinuas, al ejercicio de actividades de alto riesgo, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, y seguidamente, en el artículo tercero establece como requisitos:

*“Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.*



*Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas.*

*La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años”.*

En ese orden de ideas, estando acreditado que el actor se desempeñó en actividades de alto riesgo, específicamente en labores de minería, realizando tareas de encapizador palero en socavon, que cumplió los 55 años de edad el 08 de junio de 2020, en tanto que nació el 08 de junio de 1965 y cotizó más de 1000 semanas, es claro, que satisface los requisitos para acceder a la prestación deprecada, ahora, se tiene que de las 1319.57 semanas cotizadas por el pretensor, 1098.24 corresponden a semanas en ejercicio de actividades de alto riesgo, es decir, que cotizó 598.24 semanas adicionales a las 500 mínimas exigidas pero solo 98.24 adicionales a las 1000 semanas requeridas en total, por lo que tiene derecho a que la edad para el reconocimiento de la prestación se disminuya únicamente en un (1) año, causando el derecho a la pensión desde el 08 de junio de 2019 y no desde la fecha en que es pretendida por la apoderada del actor, pues las semanas cotizadas en otras actividades no clasificadas como de alto riesgo no cuentan para la disminución de la edad pensional. En otras palabras, el cumplimiento de las semanas mínimas requeridas solo se presentó al arribar a los 54 años de edad.

En relación al disfrute de la pensión ha de indicarse, que tratándose de pensiones especiales de vejez, la Corte Suprema de Justicia, ha seguido el criterio general según el cual el disfrute está determinado por la fecha de desafiliación del sistema, resaltando que si bien la misma Corporación ha precisado que cuando las cotizaciones posteriores devienen de la negativa injustificada de la entidad de seguridad social al reconocimiento de la prestación, debe tenerse en cuenta la inducción en error para efectos del reconocimiento del retroactivo, teoría que es referenciada por la apoderada del actor en la apelación, no obstante, en el asunto bajo examen, no se configura una inducción a error, en primer lugar, porque la entidad accionada no resolvió de fondo la petición y si bien dicha omisión podría dar lugar a un silencio administrativo positivo, lo cierto del caso, es que el actor

no contaba con los requisitos para acceder a la pensión en la fecha en que solicitó el reconocimiento, esto es, 24 de octubre de 2017, data para la cual contaba solo con 52 años de edad y como se indicó anteriormente, el derecho a percibir la prestación económica lo adquiriera a partir del 08 de junio de 2019.

De ahí que si bien ha sido enfática la jurisprudencia en señalar que ante situaciones particulares y excepcionales que deben ser verificadas por los jueces, puede acudirse a soluciones diferentes, como definir fechas anteriores al retiro del sistema (SL414 de 2022), aplicando como criterio la fecha de solicitud de la prestación, no es posible en este litigio aplicar dicho criterio, en tanto, se reitera, para la fecha en que se radicó la reclamación administrativa el pretensor no reunía los requisitos para acceder a la prestación económica. No existiendo inducción en error debe aplicarse el requisito de desafiliación del sistema para efectos del reconocimiento del retroactivo pensional.

Corolario a lo expuesto, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia en este sentido, dado que no puede afirmarse que las cotizaciones efectuadas hasta el 1° de marzo de 2020, obedezcan a una decisión de la administradora pensional en la cual se indique que el afiliado debía continuar cotizando al sistema.

De otra parte, no se hace necesario entrar a revisar el monto en el cual fue concedida la prestación, por cuanto el mismo corresponde al salario mínimo legal, advirtiendo que la cuantía de la pensión no fue objeto de reparo por el demandante. Ahora, analizado el retroactivo pensional liquidado por el juzgado, evidencia la Sala, que se incurrió en un error en la liquidación del mismo, pues se estableció el retroactivo entre el 2 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2023, en la suma de \$43.746.671, cuando el mismo debió corresponder a \$44.877.411, así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
2020	1,61%	10m, 29 d	\$ 877.803	\$ 9.626.573
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023		9	\$ 1.160.000	\$ 10.440.000
TOTAL			\$ 44.877.411	

Advirtiéndolo, que existe una diferencia de \$1.130.740, y aunque la parte actora tampoco efectuó reparo alguno sobre la liquidación efectuada por la a quo, se impone modificar en este punto la sentencia, considerando que el juez de apelaciones, excepcionalmente, está facultado para decidir aspectos no controvertidos sin alterar el principio de consonancia, cuando se trata de hacer prevalecer el derecho sustancial en tratándose de derechos mínimos fundamentales e irrenunciables de trabajadores y afiliados al sistema de seguridad social (CSJ SL3790-2019), como ocurre en este caso, como quiera que se trata de una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, y que la diferencia corresponde más a un error aritmético del juzgado que a una decisión de fondo.

Así las cosas se modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, aclarando que el retroactivo pensional a reconocer en favor del actor hasta el 30 de septiembre de 2023, asciende a \$44.877.411 y en igual sentido, resulta procedente extender la condena en concreto, en los términos establecidos en el inciso 2º del artículo 283 del Código General del Proceso, de ahí que, se condenará a Colpensiones reconocer y pagar al gestor del proceso, la suma de **\$46.037.411**, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 2 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2023, conforme a la siguiente liquidación.

RETROACTIVO PENSIONAL				
2020	1,61%	10m, 29 d	\$ 877.803	\$ 9.626.573
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023		10	\$ 1.160.000	\$ 11.600.000
TOTAL				\$ 46.037.411

A partir del 1º de noviembre de 2023, Colpensiones E.I.C.E, deberá continuar reconociendo y pagando al demandante una mesada pensional equivalente a \$1.160.000, por 13 mesadas, sin perjuicio de los incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se

liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización deferida a Colpensiones E.I.C.E. para descontar del retroactivo pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

### **De los intereses moratorios**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé:

*“ARTICULO. 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”*

Y por delineamiento jurisprudencial, los referidos intereses:

*“... (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales” (CSJ SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).*

Sin embargo, el órgano jurisdiccional de cierre también ha reiterado que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad a negar el reconocimiento de la prestación, en el anterior orden de ideas, advierte la Sala, que tampoco resulta procedente el reconocimiento de los intereses moratorios, pues se insite, aunque la entidad accionada guardó silencio, situación que en principio tornaría procedente el reconocimiento de los intereses moratorios, para el 24 de octubre de 2017, el pretensor no reunía la densidad de semanas necesarias para acceder a la pensión especial de vejez y en tal sentido, la entidad no hubiera podido ordenar el reconocimiento de la prestación, procediendo si, el reconocimiento de la indexación, la cual constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de

los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, toda vez que en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo, por lo que será confirmada también es este punto la sentencia de primera instancia.

**De la condena impuesta a Cementos Argos S.A.**

Llegado a este punto, considera la Sala que le asiste razón al poderhabiente judicial de Cementos Argos S.A. y en tal sentido, deberá revocarse el numeral tercero y consecuencialmente el cuarto de la sentencia, para en su lugar, absolver a Cementos Argos S.A., de la obligación que le fue impuesta.

Lo anterior, temiendo en cuenta que no existe discusión alguna en torno a la obligación asumida por Cementos Argos S.A., de cancelar los aportes al Sistema General de Seguridad Pensional, con la cotización adicional, previa presentación de la cuenta de cobro por parte del ISS, conforme al acta de la audiencia de conciliación del 26 de noviembre de 2007, encontrando acreditado que Cementos Argos S.A., con la respuesta a la demanda aportó certificación expedida el 30 de marzo de 2014, por el revisor fiscal de la sociedad (folio 11, anexo 15 del expediente digital) en la cual se deja constancia de que la sociedad realizó pagos por valor de \$1.724.825.658 a la Coordinación Nacional de Cobro Coactivo del Instituto de los Seguros Sociales, por concepto de aportes a la seguridad social de los empleados de Industrial Hullera, pagos que se efectuaron así:

Fecha de pago	No. de comprobante de pago	Importe del pago
19/03/2008	ND	\$ 1.553.000.000
08/09/2008	64998231	61.568.515
02/12/2008	69543820	36.819.630
24/06/2009	82586536	33.016.528
22/02/2011	120592074	26.074.860
12/03/2009	75834432	14.346.125
Total		\$ 1.724.825.658

En igual sentido, se aportó a folios 18 a 25, copia de las consignaciones efectuadas a la Coordinación Nacional de Cobro Coactivo del Instituto de los Seguros Sociales, conforme al detalle antes referenciado, estando así acreditado, que en efecto Cementos Argos S.A., cumplió con la obligación a su cargo y canceló los aportes al extinto Instituto de los Seguros Sociales.

Asimismo, reposa a folio 27 a 47, comunicación suscrita por la Jefe de Oficina Jurídica del Fondo de Pasivo Social del Ministerio de Salud, dirigida al Juzgado Décimo Laboral del Circuito, cuyo asunto corresponde a “*Respuesta Oficio #435/010-2013-01722-00*”, en la cual se indica que revisado el proceso de cobro coactivo N° 990423025 por concepto de aportes en mora contra Industrial Hullera en Liquidación se encontró la relación de ex trabajadores de la sociedad en mención, relación en la cual se encuentra referenciado el señor Antonio José Hernández Suárez por los ciclos 1995/01 a 1998/02.

De lo anterior, se colige que en efecto el extinto ISS a través de la dependencia de cobro coactivo, inició el respectivo proceso de cobro y que, en virtud del mismo Cementos Argos S.A., efectuó un pago total de \$1.724.825.658, suma que hoy no puede ser desconocida, aunado a ello, estima la Sala que cualquier inconformidad que pueda encontrar Colpensiones E.I.C.E., con relación a dicho pago, no puede ser resuelta en el presente trámite.

Asimismo, advierte la Sala que la orden de pago impuesta a cargo de Cementos Argos S.A., resulta contradictoria con la orden impuesta a Colpensiones tendiente a la depuración de la deuda por concepto de cotización adicional con el pago realizado por Cementos Argos S.A. al Seguro Social en el proceso de cobro coactivo, pues con la última orden se acepta que en efecto existió un pago por parte de Cementos Argos S.A., y en consecuencia no podría ordenarse a la sociedad efectuarlo nuevamente.

Ahora la depuración de los pagos efectuados por Cementos Argos es un trámite interno que corresponde a la administradora pensional y que no hace parte del objeto del litigio, siendo que, para el caso concreto, se establece que las

cotizaciones adeudadas por Industrial Hullera liquidada al gestor del proceso fueron canceladas por Cementos Argos S.A.

Colofón de lo anterior, se revocará la sentencia en este tópico.

Sin costas en esta instancia atendiendo a la no prosperidad del recurso de alzada interpuesto por la activa.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

**1.-** Se **REVOCA** los numerales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2023 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario instaurado por el señor Antonio Jose Hernández Suárez contra Colpensiones E.I.C.E. y Cementos Argos S.A., para en su lugar absolver a Cementos Argos S.A., de la obligación impuesta y declara improcedente la orden de depuración de deuda dada a Colpensiones E.I.C.E.

**2.-** Se **MODIFICA** el numeral segundo de la providencia confutada, en el sentido de condenar a Colpensiones E.I.C.E. a reconocer y pagar al demandante la suma de **\$46.037.411**, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 2 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2023. A partir del 1º de noviembre de 2023, Colpensiones E.I.C.E, deberá continuar reconociendo y pagando al demandante una mesada pensional equivalente a \$1.160.000, por 13 mesadas, sin perjuicio de los incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.


**3.-** Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

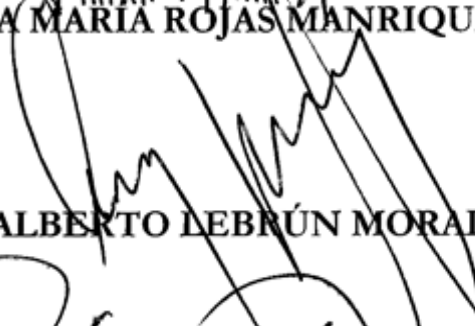
4.- Sin costas en esta instancia.


5.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**